## LAS GRANDES HUELGAS BANCARIAS DE 1958 Y 1959

Omar Acha

El presente artículo constituye un fragmento de un estudio mayor que analiza el ciclo de conflictividad bancaria y del gremio del seguro que se extiende entre 1945 y 1962. Durante el primer peronismo se producen dos huelgas importantes, en 1948 y 1950. La segunda de ellas culminó en una derrota, con 1200 despedidos. Tras la caída del peronismo en setiembre de 1955 comienza un proceso de democratización de la Asociación Bancaria (institución fundada en 1924). La caída de la capacidad de compra de los salarios y las reivindicaciones económicas y de autonomía sindical confluirán en un proceso de movilización de las bases bancarias y del seguro, donde se inscriben los dos momentos de enfrentamiento de esta franja de la clase trabajadora con la patronal y el estado.

## LA HUELGA DE 1958: LOS CÁLCULOS ERRÓNEOS DE LA "LIBERTADORA"

Después de setiembre de 1955 se procede a la expulsión de los empleados identificados con el peronismo. La Asociación Bancaria fue intervenida y puesta bajo la dirección de César González, empleado del Banco Municipal de Buenos Aires. Fue una de las tantas intervenciones *de facto* realizadas por los comandos antiperonistas munidos de armas largas. El asalto tuvo lugar el 4 de octubre. La Dirección de Servicios Sociales Bancarios pasó a ser el Instituto de Servicios Sociales Bancarios.

El 14 de octubre de 1956 el interventor González convocó a elecciones para normalizar la Bancaria. Las elecciones de delegados se realizaron el 19 de marzo de 1957. Triunfó el Movimiento Popular Bancario, compuesto por una alianza socialista y radical, seguido por el Movimiento Federal Bancario, de obediencia frondizista. La junta electoral del gremio intervenido declaró nulas las elecciones. Entre tanto, la intervención buscaba crear alguna legitimidad designando "representantes" de los empleados, cuya competencia esencial era el antiperonismo. Pero en el seno del gremio se creó una división entre la intervención y quienes reclamaban una normalización. Su fueron conformando diversas listas aspirantes a la conducción gremial ante la eventual normalización. La Lista Violeta era la de los socialistas que apoyaban a la intervención, la Lista Blanca de los radicales intransigentes (frondizistas), la Lista Plateada de los demócrata-cristianos, la Lista Azul de los radicales "del Pueblo", y la Lista Naranja de los comunistas. Una de la razones de esta proliferación de activismo fue el aumento decisivo de la cantidad de afiliaciones de la Asociación Bancaria que implicó la integración en 1956, previo plebiscito entre su base societaria, del Sindicato de Empleados del Banco de la Nación Argentina.

El Congreso Extraordinario Bancario de mayo de 1957 fue convocado en Córdoba por la intervención. Se impusieron los sectores disidentes, que sancionaron los estatutos sociales de la Asociación, por la cual se creaban las comisiones internas y un sistema indirecto de elección de las autoridades gremiales. Durante la década peronista las comisiones fueron autorizadas desde 1947, pero la Asociación controlaba las designaciones, impidiendo el surgimiento de activistas no peronistas. Aunque la formación de comisiones internas se concretaría formalmente en la segunda mitad de 1958, desde dos años atrás había comenzado un proceso de autoorganización por lugares de trabajo que sería decisiva en los conflictos por venir. El estatuto aspiraba a crear una nueva legitimidad de la dirigencia gremial.

Una primera novedad fue el diseño de un sistema de votación donde se debía seleccionar una cantidad determinada de nombres de una lista en la que figuraban todos los candidatos. Esto, que suponía un mayor trabajo de contabilización, permitía una elección más específica de los

delegados, sin el obstáculo que implica el método del voto por listas completas. Cada banco debía elegir a un delegado general, quien junto a otros elegía a su vez al delegado de la seccional; una asamblea de delegados de las seccionales nombra a los delegados al Consejo Federal, que designa a un secretario general. Se designó secretario general provisorio al frondizista Pedro Armando Castillo. Una Comisión Promotora Electoral comenzó trabajos de organización de votaciones en las seccionales del interior del país con vistas a una normalización definitiva. Los cambios estatutarios logrados no fueron el resultado de un diseño *a priori* sino la concreción jurídica de la realidad democrática de las comisiones internas que surgieron en esos años.

La intervención de César González continuaba vigente. Empleados de distintas extracciones organizaron una asamblea de 1957 a la que asistieron más de mil personas. Visto el poder de la convocatoria decidieron tomar la sede de la Asociación Bancaria, expulsar a la intervención y designar una Mesa Coordinadora.

El 19 de marzo de 1957 se realizó una convocatoria nacional para elegir congresales. Se produce una división del Movimiento Popular Bancario, del que se desprende Acción Gremial Bancaria. La Asociación, que continuaba intervenida, declaraba tener 57.400 afiliados (el número total de empleados se acercaba a 70.000). El secretario general del gremio era Pedro Armando Castillo. El órgano de la Asociación, la revista *Acción Bancaria*, abogaba por la afiliación obligatoria en vista de la "escasa cultural sindical" de un vasto sector de empleados bancarios. <sup>1</sup>

El gremio bancario estaba por entonces tensionado entre diferentes vertientes derivadas del sistema de bancos. Cada una de esas activaba distintas aspiraciones. Los bancos nacionales tenían entre sus empleados una impronta diferente a la de los bancos privados. Entre éstos últimos, no era lo mismo que una empresa financiera tuviera su casa central en el país o que residiera en un país extranjero. Tampoco era indiferente la pertenencia a un gran banco capitalino a las sucursales en el interior del país. La escisión entre jefes y auxiliares era también fuente de divergencias.

La existencia de importantes núcleos antiperonistas (particularmente visibles en los bancos Municipal de Préstamo, Hipotecario y en sectores del Banco Provincia), que por esa posición eran contrarios a realizar un paro contra un gobierno militar que los había liberado de la "Segunda Tiranía", se plegaron a la medida de fuerza. La actitud se explica por dos motivos. El primero fue la evidencia de que los reclamos salariales eran justos. Probablemente respecto de las reincorporaciones de los despedidos de 1955 persistieran divergencias. El segundo fue la legitimidad lograda por la elección de delegados, que hacían prevalecer la solidaridad de clase a las escisiones ideológicas inmediatas. La participación y comunicación parecían establecer un vínculo entre democracia y conciencia de clase.

La dictadura militar había decretado un aumento salarial para los bancarios, pero con el correr de los meses el proceso inflacionario de una tasa anual superior al 25% fue erosionando la capacidad de compra. La expresión de descontento era evidente y no se observaban progresos en el acuerdo de un incremento de salarios. El gobierno había nombrado una comisión presidida por Rubén San Sebastián para estudiar el tema de los reclamos de los bancarios. La declaración de la huelga a principios de 1958 se justificó por la demora en arribar a definiciones concretas.

El clima político tenía en vilo al país. Durante los primeros días de enero se conocieron los nombres de los candidatos para las elecciones presidenciales. Entre ellos están Ricardo Balbín, Arturo Frondizi, Alfredo Palacios, Rodolfo Ghioldi, Reynaldo Pastor, Vicente Solano Lima y Lucas Ayarragaray. No había noticias ciertas de qué actitud tomaría el líder del peronismo en el exilio. Los diarios mostraban un panorama inquieto. Llegaban a las primeras planas las noticias de la política represiva del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez.

La UCRI rechazó la propuesta comunista de formar un "frente democrático nacional". En su respuesta el partido de Frondizi expresó que "las coaliciones electoral no conducen a la clarificación de la ciudadanía y no aseguran la necesaria cohesión y responsabilidad del gobierno".<sup>2</sup>

El gobierno se preparaba para una confrontación en el sector de empleados bancarios, a los que había que sumar los del seguro, y especialmente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Asociación Bancaria, 60 años en la vida de un sindicato, sus hombres y el país, Buenos Aires, 1984, p. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "No acepta la U.C.R.I. la propuesta del comunismo", en *Crítica*, 15 de enero de 1958.

indudable que el estado disponía de buena información sobre el aceitado sistema de delegados por piso de la Caja y de la relevancia del activismo de izquierda. El 15 de enero creó una inspección general con la función de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que rigen a la Caja pero también de orientar y coordinar su labor general.<sup>3</sup>

El proceso de conflicto comenzó el 21 de enero, cuando los delegados de los bancos de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria resolvieron otorgar un mandato estricto a los consejeros federales para promover los paros que habían sido programados por el secretariado general nacional. Anticipando los conflictos, el 25 de enero el gobierno de facto Sin embargo, el día 27 se realizó un paro en la atención al público. El 28 se lanzó la huelga general por tiempo indeterminado en todo el país. En horas de la tarde la Policía Federal tomó por asalto el edificio de la Asociación Bancaria y detuvo a cerca de 700 empleados bancarios reunidos en asamblea.

El día 24 de enero el gobierno reaccionó rápidamente ante el anuncio de un plan de lucha dispuesto por el gremio de Luz y Fuerza, que realizaría paros el día 28 del mes en curso y los días 6 y 7 de febrero. Para analizar la situación se había convocado un cónclave represivo. A las 18 horas inició la reunión presidida por el general Aramburu con la presencia de los ministros Fuerzas Armadas, el subsecretario de Trabajo, el ministro del Interior, el interventor de la CGT, el jefe de Coordinación Policial, el secretario de Informaciones de Estado y el jefe de la Policía Federal. El Ministerio de Trabajo y Previsión acusó al gremio lucifuercista de propósitos de "perturbación pública y una visible finalidad política. Decretó una "cuarentena" que prohibía toda acción huelguística en los siguientes 40 días. Argumentó que el paro pretendía afectar el desarrollo de las próximas elecciones. También emitió una declaración sobre la situación bancaria, donde el gremio anunciaba un paro para el día 27.

La postura gubernamental se basa en la consideración de los beneficios qué habrían sido dispensados al gremio desde la caída del peronismo. ¿Cuáles serían las mejorías que harían ilegítimas el movimiento huelguístico? En primer lugar que a fines de 1955 se decreta la reincorporación de todos los empleados y funcionarios dejados cesantes por el gobierno peronista. Se restituye al personal la libertad para agremiarse libremente. En febrero de 1956 todo el gremio obtuvo un aumento salarial que osciló entre el 46 y el 84% de los salarios vigentes antes de la Revolución Libertadora. En el rubor de servicios sociales se restituye el dos por ciento que se había desviado hacia el Instituto de Servicio Social. Según el gobierno el bancario era el ramo con mayores beneficios sociales. Estos comprenden la ratificación de las funciones y el pago retroactivo de sueldos, un premio de fin de año que alcanza hasta el monto de dos meses de salario, sin contar con el aguinaldo, aumento del salario familiar, beneficios por jubilación y pagos por fallecimiento. Las autoridades calculaban que estos significaban un aumento real de cerca de un 27% de los ingresos promedios.

El día 24, el ministro de Hacienda, Adalberto Krieger Vasena, se reunió con los presidentes de los directorios de bancos particulares en la sede del Ministerio. La Asociación Bancaria respondió a los dichos del gobierno señalando que si era cierto que en 1955 miles de cesantes del conflicto de 1950 habían sido reincorporados, subsistía el reclamo de que se revisara caso por caso, labrando un sumario conforme a derecho, la situación de los 500 bancarios exonerados a partir del 22 de setiembre. Evidentemente, esta demanda era políticamente inaceptable para el gobierno militar.

Es preciso señalar que las heridas dejadas por los años anteriores no habían cerrado completamente. Empleados y comisiones internas se opusieron al reingreso de algunos cesantes a los que consideraban delatores o traidores. El gremio adoptó una actitud en la que afirmaba "si bien desde una posición gremial no tenemos derecho a pedir cesantías de compañeros o a impedir sus reintegros, tenemos sí todo el derecho a no admitir trabajando a nuestro lado a quien sabemos un traidor".<sup>4</sup>

En este sentido, un entrevistado que participaba en una comisión de reincorporaciones narró el caso del ex empleado de orientación peronista Oscar Barletta, miembro del Ateneo de Bancarios

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Crean una inspección en la Caja de Ahorro", en *Crítica*, 16 de enero de 1958.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "Reincorpóranse los cesantes", en *El Bancario*, edición extra, julio de 1958.

Peronistas, que solicitaba auxilio para volver a su puesto de trabajo, del que había sido expulsado en 1955. Otro integrante de la comisión, José Jaime Vila, le hizo notar al entrevistado que Barletta lo había denunciado en 1950 por haber impulsado la huelga, lo que derivo en su exoneración. En consecuencia, la comisión nada hizo en favor de Barletta.

Las amenazas gubernamentales no detuvieron las huelgas. El paro de Luz y Fuerza se realizó, a pesar de la reunión acontecida el domingo anterior al día 28 de un delegado del gremio con el interventor de la CGT, capitán José A. Ábalo. Los empleados bancarios y de seguro iniciaron las medidas de protesta el día anterior. Se constituyó un comité de huelga en paralelo a la Asociación Bancaria. Ese lunes 27, el Ministerio de Trabajo y Previsión entregó una contrapropuesta al gremio, con los siguientes puntos: 1) levantamiento del paro, 2) creación de una comisión *ad hoc* para considerar el incremento salarial y 3) la consideración de la estabilidad del personal de bancos oficiales por una comisión interministerial. La oferta del gobierno fue discutida entre el mediodía y las 6 de la tarde en la sede gremial, donde se decidió aceptarla rectificando que el aumento debía llegar al 50% sobre los salarios vigentes, la incorporación de los empleados bancarios a la ley 12.637 y la obligación de que la comisión interministerial se expidiera por escrito antes del 15 de febrero. Se reiteraba que las cesantías sin sumario previo debería revisarse.

Durante la mañana del miércoles los servicios bancarios se fueron normalizando, aunque el paro no fue levantado. El jueves 31 continuaban las gestiones. Ya se había producido algunas detenciones. El juez Mario S. Raso, por la secretaría del doctor Elías T. Raffo, se apersonó en el comisaría primera para ordenar la libertad de seis empleados bancarios detenidos en la zona bancaria el día anterior.

El 3 de febrero tuvo lugar un importante enfrentamiento del secretariado nacional de la Asociación Bancaria con la dirigencia de la seccional Buenos Aires. La seccional había aceptado un "acta" preparada en la CGT, que con la firma de tres de sus integrantes había levantado el pero. Una asamblea del día 5 convocada por el secretariado nacional decidió proseguir el paro y reemplazar a la dirección de la mencionada seccional por un "mesa coordinadora" integrada por Manuel Fuentes (entonces socialista, del Banco de la Provincia de Buenos Aires), Alfredo Supeña (Banco Nación), Alberto Waintraub (Banco de Italia), Elías Ilimovich (Banco Israelita), Alberto Báez (Banco Francés), Ramón Franco (Banco Mercantil), y otros colaboradores.

Pronto miles de telegramas colacionados llegaron a los domicilios de empleados en huelga, anunciándoles la cesantía. El 23 de febrero se realizaron las elecciones que consagraron al radical intransigente Arturo Frondizi como presidente de la República.

El 26 de febrero, una manifestación de 10.000 bancarios ocupa el centro financiero. Fueron detenidos 150 asistentes al acto. Entre las 0 y las 2.15 horas del martes 5 de febrero el Consejo Federal de la Asociación Bancaria sesionó en el local de la Confederación General de Empleados de Comercio, Rivadavia 1447. Al término de las deliberaciones, el dirigente Alfredo L. Virgilio declaró el levantamiento del paro, que no se materializaría, sin embargo, mientras quedaran bancarios detenidos. Por otra parte desconocía las facultades del comité de huelga "que por otra parte nunca puso en funciones". Ese mismo día el juez Abel M. Reyna dispone la liberación de los dirigentes detenidos, entre quienes se encontraban Walter Iscaro, Enrique O. Gussoni y Omar Lascano.

Horas más tarde una delegación del gremio acompañada por el nuevo interventor de la Asociación, Germán Rodolfo Espiaut y el interventor de la CGT se entrevistaron con el ministro del Interior, Carlos Alconada Aramburú. No obstante, un sector de delegados de varios bancos ratificó la confianza en el comité de huelga y desconoció la decisión antes mencionada. Se nombró una mesa coordinadora de delegados, enfrentada al Consejo Federal, reclamando que no se retornará al trabajo mientras durara la intervención a la Asociación y se rechazara al trabajo incentivado como condición del aumento salarial. Insistían en la liberación de detenidos. El interventor Espiaut aseguró en conferencia de prensa que no se adoptarían sanciones disciplinarias contra los empleados que se plegaron a la medida de fuerza. Aseguró asimismo que la intervención al sindicato concluiría pronto.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Quedó solucionado el pleito bancario", en *Crítica*, 5 de febrero de 1958.

Pero ese mismo día el comité de huelga, sostenido por el secretariado nacional de la Asociación Bancaria, rechazó la actitud del Consejo Federal de la misma entidad, reclamó el regreso de la institución a sus miembros, la solución del problema de los jubilados y la homologación de las escalas salarias entre privados y oficiales. El jueves se percibió el retorno de buena parte del personal a las tareas. El Sindicato del Seguro decidió levantar el paro, exigiendo la reincorporación de los despedidos en un plazo de 48 horas. No obstante, las cúpulas sindicales no lograban el retorno total a los puestos de trabajo. El comité de huelga continuaba la huelga contra la decisión del consejo federal del gremio. El paro se parcializó.

El 10 se conforma la comisión *ad hoc*, integrada por representantes de empleados y bancos oficiales. Los representantes del gremio bancario en la comisión fueron Raúl Barcones, Leopoldo Carbone, Gabriel Juárez, José Plaza Ledesma y Alejandro Pigni. Los bancos privados sostenían con la condición del retorno al trabajo como medida previa a cualquier negociación. Como resultado de esta última actitud, el personal que se había reintegrado a sus puestos se plegó nuevamente a la huelga.

El miércoles 12 la concurrencia al trabajo fue desigual. Los bancos Central e Hipotecario funcionaron normalmente, mientras en las entidades Nación, Industrial, de la Provincia de Buenos Aires, la asistencia fue menor al 50%. De los bancos privados trabajaron sin dificultades los de Canadá, Boston, y el City, mientras que el Société Générale, que había desarrollado sus actividades con normalidad sufrió una reducción notable del personal asistente.

El empantanamiento del conflicto llevó al interventor Germán Espiaut a amenazar con la presentación de su renuncia. La posibilidad de la dimisión de Espiaut parece destinada a allanar la exigencia del Secretariado Nacional sobre el reintegro de la Asociación a los bancarios. Se intentó, sin éxito, crear una comisión integrada por el Secretariado y el Consejo. El jueves 20 los bancarios solicitaron una entrevista con Aramburu, que les fue denegada. Entonces el presidente electo Frondizi comenzó a mediar entre las partes.

El 26 de febrero se realizó una manifestación en la que alrededor de 2.500 personas marcharon desde la esquina de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen hasta la Plaza de Mayo. Al llegar a la calle Chacabuco la policía inició maniobras de dispersión. En el episodio quedaron detenidas 89 personas, de las cuales 5 eran mujeres. Fueron trasladas a la comisaría nº 2. Poco tiempo más tarde unas 500 personas se reunieron afuera de la comisaría para reclamar la libertad. Como no acataron la orden de disgregarse, fueron atacados nuevamente.

Los detenidos fueron liberados por después del mediodía del lunes 3 de marzo. Pero el día siguiente se realizan nuevas detenciones, pronto liberados con la excepción de Rogelio Canosa, del Banco Español. Canosa fue duramente golpeado hasta caer desvanecido.

El 7 de marzo el interventor Espiaut designó una comisión asesora encomendada de la normalización del sindicato, integrada por Alejandro Lucantis (Banco Industrial de Santiago del Estero), R. Bernal (Banco de la Provincia de Jujuy), José Lorenzo Plaza Ledesma (Banco Industrial de Tucumán), Adelqui Marsessi (Banco Municipal de Rosario), M. Bernard (Banco de la Provincia de Mendoza), Ernesto Lecoure (Banco Sirio Libanés), Juan Carlos Irigoyen (Banco Francés del Río de la Plata), Carlos Carrascal (Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires), Julio Aguilares (Banco de la Nación Argentina), Mario Oscar Lorda (Banco Hipotecario Nacional), y Jorge Pujol (Banco de la Provincia de Buenos Aires). La comisión no tenía facultades para concluir la huelga, dado que era extraña al comité de huelga. Entonces el gobierno militar declaró la movilización militar de los empleados bancarios varones, a partir de las 0.00 horas del 10 de marzo. Se tomaron disposiciones de ocupación del sistema bancario. Unidades de la infantería de marina y de la policía se ubicaron en las instituciones financieras.

Según el decreto, el personal afectado tenía la obligación de noticiarse en las 48 horas siguientes y presentarse en el puesto de trabajo. Los infractores serían incorporados a las fuerzas armadas y sometidos a las normas disciplinarias correspondientes. El sindicato del Seguro emitió un comunicado contra la "medida totalitaria" adoptada por el gobierno de facto.<sup>6</sup> El dirigente de ese gremio, Walter Iscaro, fue nuevamente detenido.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Retorno parcial de los bancarios", en *Crítica*, 10 de marzo de 1958.

Ante la dureza de la medida de movilización militar, las muestras de apoyo de otras organizaciones sindicales continuaron siendo las de orientación comunista o "independiente". He aquí las organizaciones que declararon su solidaridad con el gremio bancario: Sindicato de Seguro, Sindicato Argentino de Prensa, Asociación del Personal Aeronáutico, Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Sindicato Buenos Aires de Luz y Fuerza, Federación de Obreros y Empleados de la Argentina, Sindicato de Agua y Energía, Federación de Empleados de Comercio de Buenos Aires, Unión Obrera de la Industria Maderera, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Delegaciones Regionales de la CGT (Concordia y Mendoza), Sindicatos Unidos de Petroleros del Estado, Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines, Sindicato Obrero de la Industria Aceitera de Buenos Aires, Sindicato de la Industria del Papel, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Unión Obrera de la Construcción, Sindicato Argentino de Músicos, Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Buenos Aires), La Fraternidad (Km. 1, FF.CC. Roca), Unión Ferroviaria, Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Afines, Sindicato Único de Relojeros y Joyeros de la Argentina, Sindicato Único de Portuarios Argentinos, Federación de Obreros de Construcciones Navales. La solidaridad de los sindicatos peronistas fue muy limitada.

El gobierno declaró un feriado bancario comprendido entre los días 12 y 15. El objetivo consistía en permitir la regularización de las actividades bancarias. También suspendió los vencimientos de las obligaciones contraídas por los bancos desde el 27 de enero de 1957 hasta el 15 de marzo de 1959, del mismo modo que los vencimientos de cobros de cheques y otros documentos con plazo.

El martes 11 la concurrencia fue sensiblemente superior a la de la jornada anterior. El ministerio de Hacienda señaló que la asistencia fue del 80 por ciento. No obstante, la evidencia de las ausencias y la intransigencia de las autoridades realimentaron el descontento. El personal que comenzó a trabajar en la Caja era la minoría y pronto se cruzó de brazos. Las mujeres que quisieron ingresar al edificio no fueron autorizadas a hacerlo. Luego de reunirse en una confitería ubicada en la intersección de Corrientes y Callao se hicieron presentes al mediodía pero no cumplieron tareas.

El miércoles 12, ante una huelga de brazos caídos en el Banco de la Provincia de Córdoba, 70 empleados en protesta fueron subidos a un ómnibus y conducidos a una unidad militar. También fue desalojada la Casa Central del BN. Los empleados fueron conducidos a la Escuela de Mecánica de la Armada.

El 14 de marzo de 1958 alrededor de 350 bancarios fueron detenidos por la Fuerzas Armadas. Fueron declarados individuos "en cumplimiento de misión efectiva" y trasladados el Quinto Regimiento de Infantería. Los detenidos pertenecían a las instituciones de mayor militancia comunista: Nación, Provincia de Buenos Aires, Londres, Italia, Industrial, Español, Bahía Blanca, Hipotecario, Mutual y Caja Nacional de Ahorro Postal. El coronel Adolfo Suberville describió el hospedaje compulsivo en el Regimiento de la siguiente manera: "No es éste un lugar donde se veja a los hombres, sino una ejemplar escuela de ciudadanía donde se fomentan valores de hombría y moral. Les damos la más cordial despedida y que Dios los ilumine".

Las autoridades militares, en la voz del marino Francisco Manrique, informaron a la prensa que aproximadamente 8 mil empleados bancarios se encontraban alojados en unidades militares en todo el país. En la Capital Federal superarían los tres mil, distribuidos entre la Escuela de Mecánica de la Armada y la del Ejército, el regimiento primero de Infantería de Marina y el regimiento primero de Patricios. Se estaban realizando los preparativos para trasladarlos a Campo de Mayo. Los empleados podían recibir visitas durante todo el día y no realizaban ejercicios de instrucción. Se prevía uniformarlos en los próximos días. La movilización dejó irresuelto el problema de la asistencia a los puestos de trabajo. Era imposible que los bancarios recluidos en las reparticiones militares estuvieran también presentes en sus labores.

La medida hizo que la huelga se extendiera. En Rosario continuó el paro. Se hizo evidente que las medidas represivas no estaban dando resultados positivos para el gobierno. Se había cometido un error de cálculo. El movimiento huelgüístico comenzaba a quebrarse. El comité de

huelga tenía un Comando de Represión liderado por Díaz, empleado del Banco Industrial, una suerte de grupo de choque destinado a hostilizar a los llamados "carneros". Sin embargo, la extensión del conflicto lo debilitaba irremediablemente.

La mediación entre el movimiento huelguístico y el gobierno pasó a manos del dirigente demócrata-progresista Horacio Thedy y, con mayor vigor, del presidente electo Frondizi. La propuesta de los empleados consistía en 4 puntos: 1) reincorporación de todos los cesantes, sin excepción; 2) libertad para todos los detenidos; 3) aumento salarial comprendido entre los 400 y 500 pesos; 4) levantamiento de la movilización. El gobierno aceptó la cuarta demanda. Los representantes de bancos oficiales mostraron su disposición a aceptar todas las condiciones. Pero los bancos privados, en cambio, rechazaban la exigencia de las reincorporaciones.<sup>7</sup>

A las 2.30 horas de la madrugada del 17 de marzo concluyó la reunión iniciada a las 18.30 de la tarde anterior, en la que se llegó a un acuerdo por el que se concedían todos los puntos demandados por los bancarios. El general Aramburu ordenó la desmovilización a partir de las cero horas del día 18.8 El dirigente bancario Pedro Armando Castillo -proveniente del Banco Nación-declaró levantadas todas las medidas de fuerza en nombre del secretariado general de la Asociación. Su discurso de anuncio acentuaba la colaboración con el gobierno y la distancia de la confrontación que caracterizó al movimiento huelguístico sin precedentes. El secretario general del sindicato del Seguro, el radical intransigente Alfredo Allende, emitió un comunicado similar, aunque los principios que mencionaba eran los de la "justicia social" y la "libertad".

Una de las condiciones de solución del conflicto fue el compromiso asumido por el presidente electo en lo que se conoció como el "acta de Frondizi".

Los representantes gremiales firman un acuerdo con Frondizi por el cual éste se comprometía a conceder el aumento demandado para bancos oficiales y privados y a asegurar el incremento salarial cuando el aumento del costo de vida superara el 10%. Luego de 52 días de huelga, el 16 de marzo los gremios bancario y del seguro retornaron a sus puestos de trabajo. El triunfo de los trabajadores suscitó una preocupada atención de las élites.

Todo parecía bien dispuesto para el gremio el 1º de mayo, día de la asunción presidencial de Frondizi. La buena voluntad del mandatario se manifestó en la designación del ex secretario adjunto del secretariado nacional de la Asociación Bancaria durante la huelga, Enrique O. Gussoni, como jefe de la Dirección Nacional del Servicio de Empleo. También fue una derivación de la victoria bancaria que uno de sus miembros, Juan Carlos Brignole, fuera nombrado presidente del Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Para imponerlo se amenazó con un paro general.

El 22 de mayo la Asociación Bancaria recuperó el local del sindicato. El acto realizado en la sede sindical, Reconquista 335, tuvo en la mesa de oradores a una nueva dirigencia, entre quienes se contaban Selene Squaglia, del Banco di Napoli, el técnico industrial Floreal Gorini, del Banco Industrial, y Arturo A. Gatto, del Banco de Italia. Gorini, empleado en el Sector Técnico del Banco Industrial, tuvo una discreta actuación gremial hasta el proceso de reorganización gremial desde las bases que antecedió a de la huelga de 1958. Fue en ella que surgió como un activista desde la base y, ya como dirigente sindical, sería un actor de primera importancia en el desarrollo de los hechos de año siguiente. Inmediatamente después del levantamiento de la huelga fue el encargado gremial de la Comisión de Salarios, con la difícil tarea de representar los reclamos bancarios y del seguro ante la Comisión Interministerial constituida para resolver las demandas económicas pendientes.<sup>9</sup> La parsimonia para concluir la redefinición de escalas salariales condujo a que el la Asociación emitiera el 28 de julio un comunicado dirigido a la opinión pública donde afirmaba que de no cumplirse el compromiso suscrito el 12 de marzo por Frondizi antes del 31 de julio, esto es, 90 días después, se volvería a la huelga. El 2 de junio anterior se había logrado el pago total de las jornadas de huelga.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> "4 puntos para resolver el problema bancario", en *Crítica*, 15 de marzo de 1958.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Decreto-ley 2974, en *Boletín Oficial*, 20 de marzo de 1958.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Integraban la Comisión junto a Gorini: Agustín A. Abbastante, Pedro Blanco Alvarado, D. Host Venturi, Susana Echazu y Jacobo Amar.

El 30 de julio, Frondizi firmó el decreto 3.133 que sancionaba el nuevo Escalafón Único de los empleados de banco, y determinaba los aumentos para empleados bancarios y del seguro. Se produjeron luego algunos conflictos menores, como en el Banco Nación por el reconocimiento de la comisión paritaria de ascensos, en el Banco de Boston en defensa de las comisiones internas y en la Caja de Ahorro por la solución del problema de los trabajadores a destajo.

Cuando la victoria de la huelga de 1958 encontró fortalecido al gremio bancario, llegó el tiempo de la concreción de la organización de base. Las disposiciones tenían una validez de dos años. No obstante, podía ser modificada por una convención colectiva en el caso de que el costo de la vida aumentase un 20% respecto de los índices de agosto de 1958. En buena medida, como lo señalaba Arturo A. Gatto, esto suponía continuar con la dinámica organizativa que había asegurado el éxito de la reciente huelga y la democratización del sindicato. 11

El 13 de junio comenzaron las elecciones de los delegados de base. El proceso concluyó el 10 de diciembre con la constitución del Consejo Regional integrado por los consejeros federales. El clima de efervescencia continuaba. La movilización del ambiente era estimulada por modestas publicaciones que permitían una ágil circulación de la información: *La Lucha* en el Banco Español, *Alerta* en el Banco de Italia, *El Silfo* en el Banco de Córdoba, *El Delegado* en el Instituto de Servicios Sociales Bancarios, *Sacco y Vanzetti* en el Banco Nacional de Desarrollo, entre otros.

Mientras tanto el programa presidencial de Frondizi seguía un curso inesperado, muy diferente al tono anti-imperialista de su campaña electoral. El gobierno fijó su norte en la industrialización, con el objetivo de superar la primarización de la economía. Las claves de su estrategia eran "la batalla del petróleo" -anunciada el 24 de julio- que aseguraría la provisión de energía a la vez que cerrara la sangría de divisas por la importación y la obtención de crédito externo.

Para el primer capítulo se realizaron acuerdos de explotación petrolera para Comodoro Rivadavia, Caleta Oliva, Neuquén y Salta, Las principales compañías extranjeras contratadas fueron Standard Oil y Banca Loeb (Estados Unidos), Royal Dutch (Holanda), Shell (Gran Bretaña), ENI (Italia) y Aguitanie-Forest (Francia). También se concedieron licencias de explotación carbonífera en Río Turbio. Dichas medidas fueron respondidas por una huelga declarada por el sindicato de trabajadores petroleros, el SUPE, de Mendoza. La huelga tuvo como respuesta la promulgación del decreto 9.764, del 11 de noviembre de 1958, que declaraba el estado de sitio en todo el territorio nacional por el lapso de un mes (Frondizi se amparaba en la ley 13.234). La medida fue homologada por la ley 14.774. Antes del vencimiento del plazo, el 4 de diciembre el Poder Ejecutivo presentó al parlamento una ley que declaraba el estado de sitio sin límite temporal. Esta decisión es crucial y debe ser recordada, porque el resto de la historia que aquí se conocerá se desarrolló bajo la amenaza constante del castigo aplicado en situaciones de emergencia. El gobierno había decidido adoptar una actitud intransigente para controlar el conflicto social. Los compromisos contraídos por el programa económico definido implicaban rechazar toda demanda que fuera incompatible con los postulados del nuevo país desarrollista que se esperaba fundar. De allí que la confrontación contra el movimiento obrero alcanzara niveles de represión inesperados.

El 28 de diciembre, Frondizi dio a conocer su "Programa de Estabilización", directamente derivado de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión de préstamos. En una alocución radial del día siguiente presentó el diagnóstico que lo justificaba.

El plan tenía como objetivos centrales el saneamiento monetario, la consolidación de una deuda externa que superaba en 1.100 millones de dólares la reserva del Banco Central, la eliminación de los regímenes de importación, subsidios y controles productivos y comerciales, que presionaban hacia el déficit fiscal y, por último, la liberación del mercado cambiario. 12 Veinticuatro días antes del anuncio de las medidas económicas, el ministro del ramo había enviado una "carta de

<sup>11</sup> A. A. Gatto, "El papel de las comisiones internas", en *El Bancario*, época 2, n° 1, enero-junio de 1958.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ver *Boletín Oficial*, 9 de agosto de 1958.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Raúl García Heras, "El Plan de Estabilización Económica de 1958 en la Argentina", en *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, vol. 11, nº 2, julio-diciembre de 2000.

intención" al FMI solicitando un convenio stand-by por un período de un año. El año anterior, el gobierno militar había contratado el primer préstamo del FMI a la Argentina, por un monto de 75 millones de dólares. La gestión de Frondizi consolidaría la relación con la entidad, pues a partir de entonces las solicitudes crediticias se reiterarían todos los años. 13 Es interesante recuperar los usos esgrimidos en 1958 sobre la utilización del nuevo préstamo. Se proponía detener la inflación, restablecer el equilibrio de los precios internos y externos, restringir la expansión monetaria. Para lograr contener la emisión de billetes se comprometía a eliminar el déficit fiscal antes de fines de 1960, restringir los gastos del gobierno en un 30% para los gastos corrientes (sueldos, salarios, gastos de funcionamiento) y en un 60% los gastos de capital (obras públicas e inversiones). Se reduciría el número de empleados estatales en un 15% y se aumentaría las tarifas ferroviarias y de la energía eléctrica, así como de los productos derivados del petróleo. Se contemplaba una estrategia de eliminación de control de precios, salvo para una lista de diez rubros básicos en la fase de transición, manteniéndose firmes los acuerdos de aumentos salariales que iban del 10 al 15% por un lapso de dos años. Puesto que se aclaraba que no existían cláusulas de correlación automática de incremento de salarios por inflación, se sobreentendía que el efecto depresivo sobre el consumo popular sería inevitable. Estas líneas directrices del programa económico frondizista explican la dureza de su actitud ante los reclamos del sector trabajador. Con el nuevo año se iniciaría una fase violenta de la lucha de clases.

El 15 de diciembre se eligió al nuevo secretariado de la regional Buenos Aires, sin duda la más importante del gremio. Jorge R. Godoy fue designado secretario general, Arturo Gatto secretario adjunto, Pablo A. Rovira secretario administrativo, Hugo Urdaniz secretario de Hacienda, Alfredo Supeña secretario de Prensa y Cultura, Rogelio Canosa secretario de Organización, Horacio A. Santorio secretario de Servicios Sociales, Walter Pezzani en Asuntos Gremiales y Mario Néstor Llanos secretario de Actas. La cúpula del Secretariado General Nacional estaba compuesto por Pedro A. Castillo como secretario general y Floreal Gorini como secretario adjunto.

Los gremios bancario y del seguro tuvieron una dirigencia heterogénea, aunque es evidente que el prestigio de los activistas comunistas había logrado un gran avance en el transcurso de la huelga. La capacidad de organización y determinación política de sus militantes suscitó un importante número de adhesiones al partido. Después de la finalización de la medida de fuerza, en la sede central del Banco de la Provincia de Buenos Aires los comunistas pasaron de 18 a 70. En una noche se afiliaron al PCA 150 bancarios en la confitería "La Fragata", casi todos delegados o dirigentes, entre los que se encontraba el ya mencionado Manuel Fuentes. Según el recuerdo de Alberto Rilo, un empleado de simpatías peronistas que le pidió afiliarse al PCA; ante la demora de Rilo, aquél lo instó a que concretara su integración porque de otro modo lo acusaría ante otros dirigentes partidarios por sectarismo, ya que creía que lo rechazaba por haber sido peronista. <sup>14</sup> Otro caso de transformación ideológica fue la de Alberto Rosso, del Nuevo Banco Italiano, que pasó de simpatías hacia el Partido Conservador a la afiliación al Partido Comunista. <sup>15</sup>

La peculiar situación histórica permitió la emergencia de nuevos cuadros sindicales, en el nivel de oficinas y como representación sindical, que no estaban matrizados por la divisoria peronismo/antiperonismo. En gremios de diferente extracción, la dicotomía mencionada establecía dos líneas que ordenaban las fidelidades de la base. Cada sector movilizaba a sus contactos y militantes. La identidad política definía los antagonismos. Los peronistas votaban a los dirigentes peronistas, los antiperonistas a los antiperonistas. Y eso sucedía también si había líneas diversas en el seno del peronismo.

Pero entre 1955 y 1959, en el gremio bancario se había producido un ambiente de pluralidad ideológica, donde el reconocimiento de las dirigencias -sobre todo en el nivel de delegados de oficina- se decidía por cuestiones ligadas al prestigio entre el personal y no tanto por la identificación política. De allí que surgieran cuadros de orientaciones ideológicas diversas, que

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> José García Vizcaíno, *La Argentina y el Fondo Monetario Internacional*, Buenos Aires, Ascensión, 1974, pp. 137 y ss

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Entrevista con el autor, noviembre de 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> C. Imizcoz, *Las luchas y experiencias unitarias del Gremio Bancario*, Buenos Aires, Ediciones Centro de Estudios, 1980, p. 46.

pudieran coexistir en la reconstrucción de la Asociación Bancaria y que lograran llevar adelante las huelgas con una notable cohesión. En efecto, la peculiar democracia sindical que, sin duda paradójicamente, era posibilitada por el desplazamiento de la antigua dirigencia peronista después de 1955. Radicales intransigentes, peronistas, comunistas, socialistas e independientes compartieron el bienio de luchas de 1958-1959. Según un recuerdo de la época, el apoyo de los peronistas se vinculó estrechamente a la cuestión de las reincorporaciones.

Un dato demostrativo de la pluralidad ideológica cultivada por los cuerpos orgánicos reconocidos por las bases es la presencia, junto a comunistas y ucristas, de un cuadro demócrata cristiano como Decio Host Venturi, trabajador en el Nuevo Banco Italiano. Cada cual conservaba sus posiciones. Así por ejemplo, Host Venturi se oponía al proyecto frondizista de ley de asociaciones profesionales que pretendía unificar al movimiento obrero detrás de una CGT conciliadora, argumentado por la no intervención estatal en cuestiones de organización obrera. Esta sería la garantía de la "libertad sindical", concluía, retomando una postura que el catolicismo social había defendido durante toda la primera década peronista.<sup>16</sup>

La superación de las divisiones políticas ante la diferencia común respecto de la intervención facilitó también la neutralización de escisiones en el nivel de las bases. Si bien en el discurso gubernamental y de la patronal bancaria se difundía la acusación de que el movimiento era obra exclusiva del comunismo y el sindicalismo peronista más concentrado compartía esta caracterización, para el conjunto de los empleados y las empleadas esas clasificaciones estaban muy lejos de la realidad del conflicto, que tenía raíces económicas. Eso estuvo presente en 1958 y continuaría en 1959.

La lucha de clases que atravesó la época de posguerra en la Argentina, al menos en cuanto surge desde la evidencia de las huelgas bancarias, condicionó las adscripciones políticas. Esto no significa que las identificaciones partidarias o ideológicas dejaran de operar. Lo que implica es que sufrieron una refiguración determinada por la conflictividad social. Salvo los casos considerados de traición, la colaboración de clase primó sobre las escisiones ideológicas. De allí que se siguieran trayectorias político-sindicales al ritmo de la dinámica singular práctica de confrontación gremial que, como se vio, provenía de la primera década peronista.

El caso de Augusto Guibourg, miembro de la Asociación de Bancarios Socialistas, muestra bien la trayectoria reciente de un cuadro político en el gremio. Guibourg había comenzado a trabajar en el Banco Industrial a comienzos de la década de 1950. Designado delegado general del banco en octubre de 1955, pasó a desempeñar el cargo de secretario de Prensa y Cultura en la Asociación Bancaria intervenida. Desde allí promovió la campaña publicitaria sobre el escalafón que tuvo lugar en 1956. Evidentemente, Guibourg había pertenecido al sector que se encaramó en el gremio después de la Revolución Libertadora. Sin embargo, sus actitudes críticas hacia el gobierno lo habían confirmado como delegado después de los primeros años y en ocasión del conflicto de 1959 continuaba en su puesto de representante de los empleados del Banco Industrial. Por su actuación en la huelga de ese año fue encarcelado.<sup>17</sup>

La seccional Buenos Aires de la Bancaria tenía una fuerte influencia de militantes comunistas. Su periódico *El Bancario* publicitaba libros abiertamente comunistas como las *Obras completas* de Vladimir Lenin o apropiadas por su estrategia de divulgación, como las de José Ingenieros, o la serie *Grandes novelistas soviéticos*.

El Bancario publicó a mediados de 1958 un poema escrito por Arturo Vázquez, del Banco Municipal, donde se celebraba la victoria del gremio en el conflicto pasado. El escrito es de interés porque, más allá de sus dudosas cualidades estéticas, expresaba una vocación de refiguración social de los empleados y empleadas bancarias. Vázquez "proletarizaba" a planteles asalariados que no se consideraban "obreros" en su Canción del triunfo de los bancarios.

El texto tenía más implicaciones que las observables a simple vista. Aspiraba a interpelar a los empleados en una nueva identidad trabajadora que no preexistía. Los empleados bancarios se

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> D. Host Venturi, "Mi opinión sobre el intervencionismo", en *El Bancario*, edición extra, julio de 1958.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> "Los bancarios son la punta de lanza de la clase obrera contra el plan antipopular del gobierno", en *La Vanguardia*, 9 de junio de 1959. Otros bancarios socialistas destacados durante estos años fueron Edgardo Vallarino y Aníbal Caride.

vestían de traje, corbata y zapatos. Dicha identificación era esencial para la acción sindical, debilitada por las divisiones de status y sueldos que caracterizaban a la ocupación.

La postura comunista en el movimiento obrero se situaba a desigual distancia de las intervenciones militares o sindicales identificadas con la Revolución Libertadora y de los sectores peronistas. Esta ubicación era especialmente visible entre la militancia comunista en la Caja Nacional de Ahorro Postal, donde tenían la mayoría de los delegados. Así las cosas, en el número uno del periódico gremial del personal de la Caja se incluyó una nota editorial donde se aspiraba a la unificación de las organizaciones obreras.

Las mieles del gobierno desarrollista se agriaron muy pronto. En la senda del acuerdo con el peronismo, los sindicatos peronistas se abocaron a colaborar con el gobierno. Sin embargo, las luchas continuaron y la represión fue una constante. Se produjeron huelgas en los gremios bancario y petrolero. El 27 de noviembre de 1958 el gobierno decretó la movilización militar del gremio ferroviario.

El quiebre violento de la resistencia ferroviaria y la persecución de que fueron objeto sus dirigentes suscitaron una declaración interna de la Mesa Ejecutiva Gremial de la CNAP, en uno de los comunicados que utilizaba para mantener una línea de comunicación con las oficinas del enorme edificio de la institución. El documento no describe un estado de ánimo generalizado sino el lenguaje y actitud de los delegados.

Una actitud similar fue adoptada por la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria. Pero la convicción de que lo sucedido con los ferroviarios anunciaba una metodología que se aplicaría a todo conflicto gremial excedía a las superestructuras sindicales bancarias y del seguro. Un comunicado de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires sostenía que ante el perceptible plan represivo era "imprescindible" que la Asociación Bancaria tomara la iniciativa de impulsar "la unión de los trabajadores" para enfrentar los problemas que les son comunes. Las medidas concretas, sin embargo, no pasaron de la declaración de solidaridad y el envío de telegramas al presidente de la república y al presidente de la cámara de diputados nacionales, donde exigían la desmovilización y liberación de los ferroviarios. 19

En el crepúsculo de 1958, el plan de austeridad estuvo acompañado por una política de represión de los conflictos laborales. Los sindicalistas comunistas se convirtieron en el enemigo más inmediato del gobierno, aunque todos sabían que la lucha con los gremios peronistas era la confrontación decisiva. La represión del comunismo aparecía para el presidente como una prueba de la voluntad de mantener el orden. El anticomunismo era una de sus cartas para contener los planteos militares y como señal hacia los Estados Unidos de la intención argentina de redefinir su lugar en el mundo.

Los petroleros y ferroviarios sufrieron derrotas en el segundo semestre del año, y los bancarios comunistas de la Caja sabían que tarde o temprano la Asociación Bancaria sería el blanco del plan represivo. Sin embargo, conservaban una marcada prudencia, dado que consideraban que una oposición directa con el gobierno conspiraba contra el orden democrático en peligro. Por lo tanto, la ambigüedad del comunismo intentaba eludir, por un lado, la sumisión a una política que se alejaba cada vez más explícitamente de las promesas iniciales de Frondizi y, por otro lado, la formación de una oposición sindical que favoreciera a las fuerzas reaccionarias que lo jaqueaban.

Las recientes experiencias de las huelgas de petroleros y ferroviarios no dejaban lugar a dudas de la actitud que el gobierno adoptaría ante cualquier oposición del movimiento obrero. Por eso, además de alertar sobre el camino difícil que esperaba a la clase trabajadora, alentaba la construcción de una CGT "monolítica", capaz de enfrentar los desafíos futuros.

Los comunistas lograron un paso decisivo en diciembre con la constitución del nuevo Consejo Regional Buenos Aires de la Asociación Bancaria. Desde el día 16 de febrero de 1959, Walter Pezzani comenzó a integrar ese Consejo, mientras que Alfredo Crivelati se integró al Consejo Federal cuatro días más tarde. A principios de febrero se había producido un conflicto interno por el cual fue desconocido el consejo federal y la comisión administrativa de la Seccional

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> "Firme actitud bancaria", en *La Vanguardia*, 12 de enero de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> "Hay que ayudar a los ferroviarios", en *El Bancario*, n° 4, enero de 1959.

Buenos Aires. A partir de entonces la nueva dirigencia comenzó a plantear reivindicaciones salariales al gobierno.

## LA HUELGA DE 1959: LOS DILEMAS DEL MOVIMIENTO OBRERO

La imagen del año 1959 en la historia social argentina está caracterizada por una gran conflictividad social y política. Los salarios reales cayeron en un 26%, la inflación alcanzó al 111% y el producto bruto interno cayó en un 8%. El Plan de Estabilización provocó recesión y la caída del poder adquisitivo de los salarios. Éstos alcanzaron su punto más bajo en el tercer trimestre de 1959. La recuperación fue lenta después, pero no recuperó los niveles anteriores a la caída. Como señala Celia Szusterman, el castigo a los ingresos salariales fue más agudo con Frondizi que con la dictadura Libertadora.<sup>20</sup>

En este caso se observa una relación causal entre las condiciones económicas y las prácticas sociales. El Plan frondizista produjo conflictividad, y los hechos posteriores demostraron que enfrentarla estaba entre las asignaturas inevitables del mismo. Durante 1959 se perdieron más de 10 millones de días laborales sólo en las huelgas realizadas en la ciudad de Buenos Aires, en las que tomaron parte 1.400.000 trabajadores, sextuplicando el número del año precedente. Los conflictos de ese año, no obstante, continuaban una ininterrumpida cadena de luchas que pronto acosaron al gobierno frondizista, aun desde mediados de 1958. La conclusión de la escalada represiva que el frondizismo estaba dispuesto a realizar halló su clímax con el Plan de Conmoción Interna del Estado, más conocido como Conintes. Aunque debe decirse que la represión política y social del período no fue meramente la introducción externa de la violencia, pues la situación crítica en lo social, lo político y lo económico estaba inserta en el cuerpo mismo de la sociedad argentina aún antes de 1955, es indiscutible que las exigencias del FMI exacerbaron los niveles de enfrentamiento contra las clases populares.<sup>22</sup>

La política represiva hacia la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre en enero confirmó lo ocurrido a fines del año anterior y dejaba claro el precedente de lo que acontecería con toda medida de protesta. El episodio del Lisandro de la Torre reveló que la resistencia obrera tenía la simpatía del barrio de Mataderos.<sup>23</sup> Esto nos habla de la continuidad de trazos de la sociedad política constituida durante la década peronista y, sobre todo, la simpatía popular que despertó la lucha por reivindicaciones económicas y nacionales. Veremos que la solidaridad no se limitó al caso del frigorífico. El ministro de Trabajo Allende renunció y fue reemplazado por el cuadro frigerista David Blejer. Con Blejer se consolidó la política que puso fin a la idea del estado como mediador en los conflictos socioeconómicos. El proceso iniciado por la Revolución Libertadora era completado por el gobierno elegido en comicios condicionados por la prohibición del peronismo.

En cierto modo, la conjunción de la renovación de los cuadros dirigentes gremiales entre los bancarios, la reciente victoria de la huelga y las promesas obtenidas entonces crearon un panorama donde la confrontación si hizo inevitable. De la misma manera, la división del movimiento obrero preparaba el camino de la derrota. El gobierno frondizista aplicó con éxito medidas durísimas y consiguió vencer, uno por uno, a distintas fracciones de la clase obrera cuya única oportunidad de éxito consistía en lograr la unidad. Las diferencias políticas hicieron imposible la reunificación de la CGT y condenaron a todas las luchas sindicales que caracterizaron a la gestión de Frondizi.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> C. Szusterman, Frondizi. La política del desconcierto, Emecé, 1998, p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Daniel James, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Margaret Konklin y Daphne Davidson, "I.M.F. and Economic and Social Human Rights: a Case Study of Argentina, 1958-1985", en *Human Rights Quarterly*, vol. 8, n° 2, mayo de 1986.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ernesto Salas, *La resistencia peronista: la toma del frigorifico Lisandro de la Torre*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1990.

El decreto 3.133/58 fue presentado por los activistas de la Caja como un triunfo. La medida establecía una modificación de las asignaciones del escalafón y, lo más importante, su artículo 31 conectaba el aumento de los salarios con el ritmo del índice inflacionario. Sin embargo, en los últimos meses del año el gobierno frondizista adoptó una postura represiva y poco negociadora. A principios de 1959 la demora en el cumplimiento de las medidas prometidas y el aumento acelerado del costo de vida condujeron a la activación de un nuevo ciclo de reclamos. Por otra parte los trabajadores textiles, metalúrgicos y químicos habían obtenido un aumento de emergencia en el pasado diciembre y serían actualizados en mayo. La Asociación Bancaria solicitó un incremento de \$ 1.500, que estaba en consonancia con la inflación. También se plantearon reclamos concernientes a los empleados "destajistas" y por la extensión del horario de trabajo. El gobierno ofreció un aumento de \$ 800, que sería otorgado sin discusión alguna con el gremio. El tono utilizado carecía de interés negociador. Es preciso recordar que Frondizi había declarado el estado de sitio desde el 11 de noviembre de 1958, aduciendo que existía un complot peronista-comunista. Se prohibieron las actividades del Partido Comunista.

Las tensiones sociales se expresaban en el nivel de cada empresa. Veamos un caso en modo alguno extraño al creciente clima de confrontación. Empleados del Banco Industrial denunciaron la creación de una comisión de vigilancia, llamada con sorna "patrulla del camino". La comisión se presentaba de improviso en las oficinas del banco y pasaba una lista para comprobar si todos los empleados se encontraban presentes. El control comprendía también al tiempo de permanencia en los baños o de la permanencia en pasillos o, incluso, de la salida a la calle para fumar cigarrillos. De acuerdo a los testimonios recogidos por *La Vanguardia*, esa comisión emulaba una constituida durante los tiempos del peronismo. Además, se lamentaban de que la biblioteca "Sacco y Vanzetti" que la comisión gremial gestionaba hubiera sido desordenada por la policía que la había clausurado después del paro de 1958.<sup>24</sup>

Durante la segunda semana de marzo las asambleas de bancarios manifestaban una creciente impaciencia antes las dilaciones y el ministro de Trabajo Blejer había anticipado que cualquier huelga sería declarada ilegal.<sup>25</sup> El ministro del Interior, Alfredo Vítolo, manifestó otro criterio. Sin embargo, prevaleció la actitud adoptaba por Blejer. Los sindicatos decidieron paros parciales y progresivos a partir del día miércoles 18. La medida obtuvo un importante acatamiento. Durante la tarde del viernes 20, a través de un comunicado firmado por Juan H. Martínez, la Asociación Bancaria señaló que no realizaría medidas de fuerza el lunes 23, como una muestra de buena voluntad. Las autoridades, que hasta entonces –según el gremio- se habían mantenido impermeables, deberían entablar el diálogo. De otra manera se reiniciarían los paros el martes 24.<sup>26</sup>

El martes se reiniciaron los paros durante las dos últimas horas de atención al público. Por su parte, la comisión gremial interna de la Caja de Ahorro informó que de 756 agentes que debían prestar servicio en el turno de la mañana, 732 se plegaron al paro. La dirección aplicó tres días de suspensión como medida punitiva. En las entidades bancarias, las informaciones llegadas de La Plata, Córdoba y Salta indicaban que la medida también se había concretado en el interior del país. En la CNAP y en los bancos oficiales se prohibió el ingreso a los huelguistas. El personal de las entidades que tomaron esa decisión comenzó a agolparse en las puertas de entrada de sus respectivos edificios de trabajo. Carros de asalto de la policía patrullaban la zona céntrica de la City financiera y la Caja de Ahorro. Las acciones represivas tendientes a disolver los grupos de empleados y a detener a algunos de ellos, decía un diario, "dieron al pleito bancario una expresión tensa y por momentos turbulenta".<sup>27</sup>

Los paros parciales continuaron hasta fin de mes. El ambiente social seguía crispado. El diario conservador *La Nación* realizaba un análisis lúcido y partisano de la situación. El editorial titulado "En el umbral de la violencia" no era profético, dado que la represión social ya había comenzado. Esquematizaba las líneas de la acción sindical en dos orientaciones: la que respondía a

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> "Clima intolerable en el Banco Industrial", en La Vanguardia, 2 de febrero de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> "Será ilegal el paro bancario", en *La Nación*, 17 de marzo de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> "Siguió el paro en los bancos", en *La Nación*, 21 de marzo de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> "Con incidentes siguió el paro en los bancos", en *La Nación*, 26 de marzo de 1959.

los fieles al "régimen depuesto" y la comunista. Los gremios peronistas había perdido el norte, estaban "desorientados". Esta es una observación justa, pues se ha tendido a sobredimensionar la claridad estratégica de las cúpulas sindicales peronistas. Por otra parte, continuaba el editorial, el comunismo compensaba su falta de "arraigo popular" con el entrenamiento en las lides sociales que le otorgaba la experiencia partidaria. Donde fallaba el análisis era en el matrimonio por conveniencia que detectaba entre peronistas y comunistas. En efecto, *La Nación* sostenía que la nueva burocracia sindical peronista, consciente de su ineptitud, permitía que los comunistas alcanzaran rangos ejecutivos en los gremios para evitar "ser desbordada por la masa". El gobierno, por su parte, se encontraría entrampado en la politización que rigió las relaciones más o menos secretas con la dirigencia sindical. Los acuerdos logrados de ese modo sólo favorecían la campaña comunista que especulaba sobre los beneficios electorales que le reportaría la continuidad de la conflictividad social. La solución general del texto era la subordinación "viril" de los asalariados al trabajo, tan necesario para un país en decadencia.<sup>28</sup>

El día 2 de abril el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó para el lunes 16 a las entidades que se regulaban por los decretos 3.111/58 y 3.686/58 para reunirse en la Dirección General de Relaciones del Trabajo. El objetivo era estudiar un aumento de emergencia y otras peticiones solicitadas por la Asociación Bancaria y el sindicato del seguro.<sup>29</sup> No obstante, la movilización de personal de los citados gremios tornaba demasiado extensos los tiempos del gobierno. El viernes 3, una manifestación bancaria en las inmediaciones de la Plaza de Mayo derivó en enfrentamientos con la policía. Varios automóviles estacionados fueron siniestrados. El diario *Crítica* mencionaba que en el lugar fueron vistos los concejales comunistas Luis Fiori y Alcira de la Peña.

El gobierno informó que el personal bancario que se plegara a la medida de fuerza sería cesanteado. La decisión de comenzar el paro no fue fácil. Se vivía en un clima de represión policial. El estado de sitio era un contexto poco propicio para un reclamo, tal como lo había demostrado la derrota de varias huelgas recientes.

Un militante del Provincia recuerda la escena de las horas anteriores al lanzamiento de la huelga, que no contaría con el apoyo de la CGT. Jorge Tarulli, por entonces simpatizante de la UCRI, recuerda una escena de los días previos. Acababa de llegar en la tarde otoñal al "London Bar", ubicado en la esquina de Sarmiento y Reconquista, en el microcentro porteño. En una mesa se encontraban Gorini y Jorge Godoy (delegado del Nación). Al sumarse, el activista percibió la preocupación reinante. Con la mirada inquieta, Gorini le dice: "Tengo miedo de lanzar la huelga. Estamos muy solos". El temor era fundado. A la distancia se observa que se creyó posible derrotar nuevamente al gobierno y la patronal, como en 1958. El deseo de reiterar la victoria aparecía en el grito de "¡Una, dos y tres, bancarios otra vez!" que se entonaba en la vía pública. Se perdió de vista que aquella huelga fue ganada a un gobierno en retirada y bajo la presión del proceso de cambio de autoridades nacionales. En 1959 la situación era muy diferente. El gobierno de Frondizi tenía varios frentes de conflicto, pero aun se encontraba con fuerzas para combatir a una oposición sindical. La determinación de la dirigencia bancaria para ir a un paro era sin embargo irreversible.

Los gremios bancario y del seguro decidieron ir al paro por 24 horas para el día 12 de abril. Como recaudo se constituyó un comité de huelga alternativo para que actuara en caso de que se encarcelara a los dirigentes bancarios. Para desarticular la medida el gobierno decreto el feriado bancario los días 14 y 15 de abril, y en la madrugada del 15 la Asociación Bancaria fue intervenida. A las dos de la madrugada la policía allanó la sede sita en Reconquista 331/335. Los dirigentes que estaban en la sede huyeron por los fondos, bloqueando con cadenas el ingreso antes de salir. Por la mañana llegaron refuerzos policiales y a las 10 horas forzaron las cadenas con una palanca de hierro. Cuando finalmente la policía pudo ingresar tras paralizar el tránsito durante 45 minutos, no halló a ninguna persona en el local.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> "En el umbral de la violencia", en *La Nación*, 31 de marzo de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> "Se constituirá el lunes la Comisión que considerará el aumento a los bancarios", en *Crítica*, 2 de abril de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Entrevista con Alberto Tarulli, Buenos Aires, julio de 2007.

De acuerdo a lo decidido en la Asamblea General del gremio realizado el 16 de marzo (el mandato había sido "implícito", según reconocía la prensa),<sup>31</sup> el secretario general del Sindicato del Seguro, Elvio Flores, y el secretario adjunto, Carlos G. Villegas, tomaron la resolución de adherir a la medida de fuerza bancaria para el 14 de abril. Ese día fue intervenido el Sindicato del Seguro y fueron detenidos sus principales dirigentes.

El presidente emitió el decreto 5.537/59 de "Estabilidad y disciplina del personal bancario", que modificaba el decreto 20.268 de reglamentación de la ley 12.637. El decreto de Frondizi fue mejor conocido como "decreto Blejer". La norma consideraba inasistencias injustificadas las huelgas declaradas ilegales por el estado. Por ello podía se podía despedir sin necesidad de sumario, con la sola intimación de presentarse a trabajar en un plazo de 24 horas. Se indicó también que se convocaría a personal militar para realizar las tareas, para lo cual el ministerio de Defensa ordenó a todo el personal en situación de retiro que actualizara sus domicilios en un plazo no mayor de 72 horas. La Asociación Bancaria y el Sindicato del Seguro resolvieron iniciar el 13 de abril un paro general de actividades por tiempo indeterminado. Entretanto, el jefe policial, el capitán de navío Niceto Vega, hizo saber que 20 personas habían sido detenidas por su complicidad con la huelga. Una dialéctica de hechos fue agudizando los enfrentamientos. El gobierno aplicó el método de destrucción del sindicato en rebeldía, tal como era temido por la dirigencia gremial bancaria.

Por su parte, el secretario adjunto del Sindicato del Seguro, Carlos G. Villegas, informó la detención del secretario general del gremio, Elvio Flores, y de otros dirigentes: Alejandro Nery Huerta, Miguel Fortuny, Jorge Castro, Léryda Pimental, Alberto Martínez.

El Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS, ex "19"), compuesto por sindicatos de dirección comunista pero también con algunos socialistas importantes tales como Empleados de Comercio y Viajantes) manifestó en un comunicado su "enérgico repudio" por los allanamientos policiales a las entidades sindicales, y señaló que se cercenaba los derechos constitucionales tales como el de peticionar. Por último convocó a todas las organizaciones sindicales "para que de inmediato se aboquen a determinar un plan de acción en común" en la situación de emergencia.

El paro por 24 horas devino en una huelga por tiempo indeterminado. Para explicar la escalada del enfrentamiento que desencadenó la acción intempestiva del Ministerio de Trabajo, algunos bancarios se plantearían la hipótesis de que el gobierno condujo los hechos al extremo para poder destruir al gremio y expulsar a gran cantidad de personal.<sup>32</sup> Esta conclusión, señalada por el socialismo en el mismo momento de los hechos, también fue inferida por los comunistas después del fin del movimiento.<sup>33</sup>

El 16, concluido el feriado, se anunció que los bancos oficiales y privados reabrirían sus puertas. La policía amenazó con reprimir toda incitación a la huelga y proclamó que "actuará con la energía necesaria para reprimir actos que importen la alteración del orden público". El ministro de Trabajo declaró ilegal al paro y decidió la intervención de los dos gremios implicados.

Los doctores Horacio Pietranera y Raúl Oscar Ferrari fueron designados en la Bancaria y Seguro, respectivamente. El primero era asesor del ministerio de Trabajo y el segundo veedor de la Federación de Empleados de Comercio.

Por su parte, los bancos oficiales y la dirección de la Caja Nacional de Ahorro Postal decidieron una serie de medidas draconianas destinadas a destruir cualquier foco de resistencia. Se prohibió toda actividad gremial dentro de las instituciones financieras. Se anularon las licencias gremiales y las franquicias horarias acordadas a los delegados del personal. Las inasistencias producidas a partir del día 16 debían ser justificadas inmediatamente, con riesgo de despido. Lo mismo ocurriría ante toda incitación al paro, al desorden, el trabajo a desgano, "la resistencia a las indicaciones superiores, o cualquier otra forma ostensible o encubierta de no prestar la plena colaboración habitual". El personal en período de prueba que no desarrollara sus tareas

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> "Realizará paros el personal del seguro", en *La Nación*, 17 de marzo de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Entrevistas con el autor en noviembre de 2006.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ver *Sus experiencias y enseñanzas*, suplemento de *Ascender*, órgano oficial de los Bancarios Comunistas, 22 de agosto de 1959, p. 13.

normalmente sería despedido sin más trámite. El personal jerárquico y técnico debía prestar los servicios que se le encomienden, aun cuando fueran distintos de sus funciones habituales. Quedaban suspendidas las licencias extraordinarias a partir de la fecha, y las previamente acordadas serían sometidas a un examen minucioso. Se abriría un registro para que se anoten todos quienes se ofrezcan para realizar tareas en reemplazo de los declarados cesantes.

En Avenida de Mayo 591, sede de la Dirección General del Servicio de Empleo, se habilitó una bolsa de trabajo para cubrir las vacantes de trabajadores bancarios. Por último, se invitaba a los bancos oficiales de provincias y municipalidades, así como a los privados, a aplicar similares medidas.

La Asociación de Bancos de la República Argentina también se sumó al combate contra la huelga y decidió que pidan documentos de identidad a quienes ingresen a las instituciones financieras

En una conferencia de prensa, el presidente Frondizi señaló que aun no se había considerado la movilización militar del personal bancario, aunque no descartaba la adopción eventual de la medida dado que, añadía, "estamos dispuestos a hacer que los bancos funcionen y para ello tomaremos todas las medidas indispensables".<sup>34</sup>

No obstante el embate patronal y del ministerio, el día 16 la medida de fuerza continuó, imposibilitando las transacciones mayores. La bolsa de comercio no operó. El gobierno comenzó a debilitarse. El ministro de Obras Públicas, por ejemplo, creyó necesario declarar públicamente su solidaridad con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, David Blejer, "en esta situación especial en que se encuentra el ambiente gremial". Blejer declinó el contacto con la prensa en la conferencia que se había anunciado, pero en una conversación informal reconoció que se tomarían nuevas medidas para garantizar el funcionamiento de los bancos. Las autoridades solicitaron al público que concurriera a los bancos para realizar las operaciones más urgentes e impostergables. La atención fue de horario reducido (a partir de las 13 horas) y se utilizó al personal bancario en cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Los diarios publicaron fotos de marineros atendiendo ventanillas en el Banco Central. ¿Qué repercusión tuvo el paro en su segundo día (el primero fue neutralizado por el asueto)? En el Banco de la Nación Argentina -donde la asistencia llegó al 26% en la casa central y al 10% en las sucursales del interior del país- se efectuaron sólo las operaciones de cuentas corrientes. La prensa informaba que en el Banco Industrial concurrió un 62% del personal técnico y administrativo, aunque el de maestranza estuvo ausente casi en su totalidad. El Banco de la Provincia de Buenos Aires informó que en su casa central se atendió el pago de jubilados, caja de ahorro y cajas de seguridad. Del personal administrativo concurrió sólo el 25%. Como en el caso del Industrial, en el Provincia los empleados maestranza se plegaron al paro en su gran mayoría. En las sucursales de la Capital Federal y las zonas suburbanas se presentó casi exclusivamente el sector jerárquico, por lo que no funcionaron. En cambio, sí operaron las sucursales del interior del país, donde registro la asistencia de todo el rango jerárquico, el 90% de maestranza y el 75% de auxiliares. En cambio, en la sede central de La Plata la concurrencia jerárquica fue parcial y la del personal subalterno nula. En el Banco Municipal de Buenos Aires se registró una asistencia del 54%. El Banco Hipotecario no proveyó cifras de ausentismo. Dada la concentración del sistema bancario -los bancos Nación, Industrial, Hipotecario y Provincia poseían cerca del 50% del total de los depósitos y préstamos del país- era en este rubro donde se decidía la suerte de la huelga.<sup>35</sup>

¿Qué sucedió en los bancos privados? Estos fueron los datos provistos por dichos bancos, de acuerdo a porcentaje de asistencia: Royal Bank of Canada, 100; City Bank of New York, 76; Bank of Boston, 75; Nuevo Banco Italiano, 25; Banco de Italia y del Río de la Plata, 80; Banco Español y del Río de la Plata, 30; Banco de Londres, 68. En todos los casos, el personal jerárquico concurrió en un 100%. Los bancos de Tokio, Italiano del Uruguay y Popular Argentino atendieron al público con custodia policial y control del personal en el ingreso de sus puertas principales.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> *La Prensa*, 17 de abril de 1959, p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Sobre la relación entre banca oficial y privada, véase Jorge Raúl Alcibar, *La concentración bancaria. Su evolución en* Argentina, Buenos Aires, Macchi, 1964, pp. 111-112.

El comité de huelga de la Caja fue una impulsora principal del conflicto. El delegado general de la CNAP, Ángel Roberto Rescala y las actividades realizadas por el secretario de Prensa, Julio Álvarez, fueron esenciales en la cohesión del personal. La concentración de personal en la sede Congreso, movilizable a través de un aceitado sistema de delegados por piso, le permitía el logro de una cohesión que se revelaría decisiva.

De acuerdo al ministerio de Trabajo, las ausencias de personal alcanzaron al 35,6%, mientras que el comité de huelga informó que el paro alcanzó al 82% de los trabajadores. En la Caja Nacional de Ahorro Postal, siempre según datos del comité, la huelga tuvo una efectividad del 96%, incluyendo al personal jerárquico.

Una táctica singular fue la presencia callejera del personal en huelga. Los dirigentes establecían un cronograma de lugares de reunión para manifestar la protesta. Esto brindaba movilidad y sorpresa a las reuniones, que eran imprevisibles. Cuando los efectivos policiales lograban desplazarse al sitio de represión, la pequeña muchedumbre se dispersaba para reunirse más tarde en un lugar desconocido. Para reprimir esta modalidad la *city* porteña fue literalmente ocupada por la policía. Hubo carros de asalto apostados en las esquinas de 25 de Mayo y Rivadavia, 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, Reconquista y Bartolomé Mitre, Reconquista y Cangallo, Reconquista y Sarmiento, San Martín y Rivadavia, San Martín y Cangallo, San Martín y Sarmiento, Florida y Diagonal Norte, y San Martín 146, frente al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Además, la zona era recorrida por coches blindados pertenecientes a la Coordinación Federal de la policía. En todos los edificios bancarios hubo agentes uniformados, tanto en las puertas como en el interior de los establecimientos. Los mismos registraban los paquetes y bolsos de todas las personas que ingresaban y en algunos casos requerían documentos de identidad. En ningún momento se permitió la formación de corrillos o de grupos en las calles. Así fue que se detuvieron a 17 personas frente al Banco Provincia.

La policía ingresó a varios bares de la zona para verificar identidades y "sugirió" a sus dueños que cerraran sus comercios durante un breve lapso.

A la hora de inicio de las actividades el Cuerpo de Guardia de Infantería apostado en la intersección de Diagonal Norte y Carlos Pellegrini observó el paso de un automóvil desde cuyo interior se arrojaban volantes promoviendo la huelga. El vehículo fue perseguido y sus cuatros ocupantes detenidos. Horas más tarde el subdirector de Seguridad de la Policía Federal, el comisario inspector Osvaldo D. Storni informó a la prensa que habían sido detenidas 40 personas.

En el sector del Seguro, según información provista por el interventor del gremio, el doctor Ferrari, la asistencia registrada fue total en las siguientes firmas: El Cóndor, Instituto Italo-Argentino, India, Iguazú, Industriales Unidos, Unión Comerciantes, Columbia, La Franco-Argentina, Boston, La Estrella, América, Los Andes, Atalaya, Antártida, La Anglo-Argentina, Comercio Español y Argentino, El Surco y La Tandilense. En cambio, en otras la asistencia fue la que se detalla a continuación: Amparo, 82%; La Agrícola, 76%; Hermes, 65%; La Cruz del Sur, 60%; Compañía Aseguradora Argentina, 55%; El Mundo, 50%; Comercial e Industrial de Avellaneda, 40%; Océano y Territorial, 30%; La República, 25%; Aconcagua, 20%; La Universal, Austral y Fénix del Río de la Plata, 15%; La Inmobiliaria, 10%, y La Primera, 5%.

Los 62 gremios peronistas se reunieron clandestinamente en un local de Buenos Aires para discutir sobre la huelga bancaria. De acuerdo a la información periodística, se entrevistaron con dirigentes de la Asociación Bancaria, que en ese momento estaba integrada a los "19 Gremios Independientes". Si bien trascendió que se comprometieron a prestar ayuda al gremio en lucha, no se tomó ninguna medida concreta. Las únicas medidas cegetistas tuvieron anclaje local, como sucedió con un paro decretado por la Delegación Regional Tucumán de la CGT y otro de la Delegación Avellaneda.

Floreal Gorini y Alberto Rilo se presentaron en una reunión del plenario nacional de las 62 Organizaciones en la sede del sindicato de Luz y Fuerza. El objetivo era obtener un paro de solidaridad. No les permiten acceder a la asamblea. Fueron recibidos en una habitación por el gremialista fideero Miguel Gazzera. El sindicalista peronista les manifestó que su política consistía en hacer paros locales. Gorini pidió hacer la propuesta ante el conjunto de los representantes

sindicales. Según el recuerdo de Rilo, Gazzera objetó: "Ustedes no van a hablar porque me van a dar vuelta la asamblea". En efecto, una intervención de delegados bancarios en una asamblea había logrado el paro de 24 horas de la seccional Avellaneda de las 62 Organizaciones.

Los 32 gremios "democráticos" antiperonistas, dirigidos por Salvador Marcovecchio y Francisco Pérez Leirós, fueron explícitos en su solidaridad dado que, sostenían, el sector "entiende que el conflicto constituye una clara e incontrovertible manifestación de inquietud y desagrado de este sector y toda la clase trabajadora sumergida y angustiada por el proceso inflacionista que, en absoluto desamparo jurídico y social, debe enfrentar con desventaja". <sup>36</sup> Respecto a las autoridades nacionales decían: "la actitud del gobierno, que difiere fundamentalmente con lo expresado en su oportunidad por el doctor Frondizi en el anterior movimiento de fuerza, se aparta de las más democráticas prácticas de prudencia y pacificación, cuando se pretenden inmoralizar la conciencia del pueblo con ofrecimientos de empleo". Por último, declaraban: "no será con violencia ni con cercenamiento de derechos obreros como se ha de conducir al país por la senda de la comprensión de la justicia y la soberanía económica, la mesa coordinadora se declara pública y enérgicamente solidaria con el movimiento bancario". También manifestaron su adhesión otras entidades como la Confederación General de Empleados de Comercio, la Unión Obrera de la Construcción, la Coordinación Sindical Democrática de Empleados de Comercio, el Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino y La Fraternidad. Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación dispuso que sus afiliados no se presten a reemplazar a los bancarios en huelga. "El que así lo hiciera", expresaba el mencionado sindicato, "sería un traidor a su clase, y desempeñaría el triste papel que el gobierno quiere asignar a los servidores del Estado".

La mesa ejecutiva gremial de la CNAP denunció los sumarios e interrogatorios de corte policial, en medio de una cerrada vigilancia policial, que promovían el presidente de la entidad, Jorge C. Sutton, y el gerente general, Mariano Rimodio. Sutton había sido integrante de los Comandos Civiles del levantamiento antiperonista de 1955. También tenía ese antecedente Ulises Barrera, parte de la intervención en el Banco Nación.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Pedro A. Castillo, y el secretario de prensa, el también radical intransigente Alfredo Crivelati, hicieron circular un comunicado. En él mencionaban "la cohesión y unidad del movimiento han desvirtuado categóricamente los infundios vertidos sobre los objetivos de la huelga". Sostenían que un importante progreso se había dado en la adhesión lograda entre el personal jerárquico y técnico. Por otra parte, continuaban, "la huelga se rodea cada vez más de la solidaridad del pueblo y la clase trabajadora, expresada en la solidaridad de muchos sindicatos, lo cual será un estímulo más para que el gremio bancario triunfe en esa lucha que persigue fines comunes a todos los trabajadores".

El comunicado del Sindicato del Seguro es revelador del contexto que las autoridades gubernamentales le imprimieron al movimiento huelguístico. La estrategia del ministro Blejer consistió en denunciar a la huelga como una maniobra de provocación comunista, cuyos militantes se habrían encaramado en la dirección del sindicato bancario. Lo argumentaba al señalar que el movimiento fue promovido utilizando consignas referidas a la explotación del petróleo, la radicación de capitales extranjeros, la reforma agraria y la política monetaria y financiera. Ante eso apelaba al "patriotismo" que hiciera volver al personal al trabajo. Sin embargo, durante el segundo día de paro, el 17, la medida de fuerza continuaba firme, por lo que comenzó a implementarse una serie de disposiciones para el reemplazo de trabajadores. Se convocó a los conscriptos, se llamó a los jubilados del oficio y se contrató a personal no escalafonado. El ministro reconoció implícitamente la importancia de la huelga al anunciar que el gobierno estaba preparado para una huelga que suponía será larga, y se disponía a enfrentarla hasta el final. El lenguaje utilizado por el funcionario era intransigente y la actitud era explícitamente ligada al enfrentamiento suscitado en el frigorífico Lisandro de la Torre. Esa vinculación con un conflicto identificado con el peronismo desmiente los planteos anticomunistas del gobierno, pues revela que el objetivo general fundamental se hallaba en el plano de una voluntad de disciplinamiento social de los sectores

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Este y los dos extractos siguientes provienen de *La Prensa*, 17 de abril de 1959, p. 4.

asalariados. Si bien para el caso particular de los gremios de bancos y seguro el denuesto anticomunista era útil, se trató de un tema circunstancial de combate contra el sindicalismo.

El gobierno había decidido, como era ya su método ante los conflictos con los asalariados, que únicamente aceptaba la derrota absoluta de los bancarios. Más allá de la solución del conflicto de la hora, el gobierno comenzó a elaborar un rediseño del sistema bancario que neutralizara el poder de conmoción de la actividad financiera que el sindicato bancario había mostrado en 1958 y reiteraba en 1959.

Se organizó una comisión de prensa que tuvo dos objetivos. El primero consistió en mantener un canal propio de información con la base. Se trabajó con varias imprentas que producían los comunicados diarios. Las notas cotidianas eran especialmente eficientes en la CNAP. El segundo objetivo fue el de contrarrestar la campaña de la prensa escrita, la televisión y la radiodifusión contra la huelga (aunque debe decirse que algunos medios, como *Crítica*, no eran hostiles al movimiento en su comienzo). Alrededor de las dos de la madrugada una comisión redactora se reunía en una imprenta para disponer a las ocho de la mañana de los materiales listos para ser distribuidos entre los delegados.

La multiplicación de comunicados de los diversos niveles de la organización huelguística aspiraba a crear un canal de información propio, antagónico a las campañas "confusionistas", como se las llamaba en el lenguaje de la época, del gobierno y la patronal. Por eso los activistas del City Bank prevenían a sus compañeros que "resulta beneficioso insistir en que *cada bancario debe seguir sólo las instrucciones de los delegados, sea cual fuere la información periodística o radial*". <sup>37</sup> Por su parte, el comité de huelga del Banco industrial establecía una cadena de enemigos donde medios de comunicación y medidas represivas aparecían en un mismo plano: "Recordemos que que diarios, radios, televisión, telegramas de cesantía o iniciación de sumarios, etc., son medidas destinadas a asustar a los timoratos y deben ser desoídas en absoluto". <sup>38</sup>

El comité del Provincia publicaba un pequeño periódico para denunciar las maniobras de colaboración y rompehuelgas, titulado *En las...* [*Pelotas*]. En los comunicados de la CNAP también se mencionaba a los jefes y empleados colaboradores. La violencia caracterizó a todo el proceso. Desde los trabajadores en huelga se intentaron aisladamente algunas acciones directas. En Mar del Plata, por ejemplo, estallaron bombas de alquitrán en los frentes de las casas de empleados que no se plegaron al paro.<sup>39</sup>

Como se ha señalado, el acatamiento en el segundo día de paro fue elevado. Esto ocurrió especialmente en la banca oficial. Durante todo el conflicto las entidades estatales fueron las que registraron mayores niveles de adhesión a la huelga. Los porcentajes oficiales de concurrencia fueron del 40% en el Banco Central, del 20% en el Banco Nación, del 26% en la Caja y del 20% en la Dirección Nacional de Préstamos Personales. Los bancos privados, de acuerdo a información brindada por su representación corporativa, tuvo un nivel desigual, aunque relativamente alto de concurrencia. En el interior del país el paro se hizo más fuerte. En La Plata la actividad bancaria fue nula, dado que disminuyó la escasa asistencia del día anterior. En Mar del Plata la puerta del Nación y del Provincia permanecieron cerradas mientras que las obras casas atendieron el pago de jubilaciones con personal jerárquico. En Bahía Blanca la inactividad fue casi absoluta. En San Luis el panorama fue más heterogéneo, dado que trabajaron normalmente los bancos de Crédito Industrial e Hipotecario, mientras que el Nación lo hizo de manera parcial y el Provincia tuvo asistencia nula. En San Juan sólo el Banco Industrial tuvo actividad. En Rosario, donde la huelga se fortaleció en comparación con el día anterior las instituciones oficiales cerraron sus puertas. También en Mendoza el ausentismo se incrementó. En Córdoba tampoco hubo actividad bancaria.

Finalmente, las 62 organizaciones peronistas declararon que la situación en el campo gremial era crítica y censuraron la intervención del gremio bancario. No obstante el apoyo fue tibio, lo que motivó que el MUCS iniciara gestiones antes los 62 y los 32 para que se adoptaran medidas

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> "Comunicado de la Comisión Gremial Interna del Banco City", sin fecha.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Comité de Huelga del Banco Industrial, "Comunicado n° 2", [17 de abril de 1959].

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> "Atentados en Mar del Plata", en *Los Principios*, Córdoba, 23 de abril de 1959.

más claras, llegando incluso a medidas de fuerzas. También reprocharon el alto nivel de represión la Unión Cívica Radical del Pueblo y el Partido Demócrata Progresista.

El gobierno mantenía su postura, aunque algunos dirigentes del radicalismo intransigente, como Raúl Damonte Taborda, intentaban contactar a la dirigencia prófuga de la Asociación Bancaria para lograr una salida al conflicto.

El ministro Blejer proclamó a la prensa: "No cederemos a la subversión". Su lenguaje era bélico e intransigente. Se amparaba en declaraciones de los dirigentes bancarios donde éstos vinculaban sus demandas con críticas a las medidas gubernamentales relativas a la explotación petrolera, radicación de capitales externos, política monetaria y otras. Al respecto dijo:

El ministro dijo también que si era necesario despedir a *todos* los bancarios para resolver el conflicto la medida sería adoptada. El problema crucial para el gobierno residía en la extensión del movimiento huelguístico entre la base gremial, que lamentaba llamándola una "mal entendida solidaridad". Entre tanto, aunque la decisión de militarizar la huelga era desmentida oficialmente, se realizaban reuniones en el ministerio de Defensa para definir la movilización militar.

Cuando el gremio fue militarizado, se utilizó un método diferente al fallido empleado en 1958. Se movilizó a uno de cada cinco bancarios, con el objetivo de quebrar la cohesión del conjunto.

El sistema de información de los bancarios y empleados del seguro continuó con rigurosa precisión. Para que la distribución de materiales funcionara la huelga implicó algo más que la concurrencia al lugar de trabajo sin realización de tareas o la ausencia: era imprescindible la comunicación cotidiana con los delegados y la negociación participativa de los conflictos que la marcha de la huelga pudiera ocasionar. Así lo aconsejaban los activistas del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando decían: "recomendamos a todos los compañeros a mantenerse en permanente contacto con sus respectivos delegados y solucionar de común acuerdo todas las vioalaciones de las normas emanadas de nuestro sindicato". Se estimó que ante el aislamiento del gremio la huelga dependía de la participación de la masa en paro. La comisión interna del Banco de Italia y del Río de la Plata calculaba que las tareas de venta de bonos para obtener recursos monetarios, la "persuasión", pegatinas y pintadas, así como la visitas a delegados de fábricas y comercio para lograr el apoyo solidario, insumían 7 horas de actividad diaria para diez mil bancarios. La cifra es incierta, aunque revela la conciencia que existía de la importancia de la acción concertada y militante. In conciencia que existía de la importancia de la acción concertada y militante.

Los dirigentes de la huelga también echaron mano a una táctica muy al tono de la época. Con motivo del día de la bandera nacional, 20 de junio, Castillo y Gorini grabaron un disco con un discurso gremial que debía circular entre los diversos núcleos de huelguistas, especialmente en el interior del país. El procedimiento imitaba la distribución peronista de cintas con mensajes de Juan Perón desde el exilio. Pero lo hacía, además de por la técnica de grabación de discurso oral, por la adopción intencional del estilo del líder peronista. La indicación es importante porque muestra que la invocación al sostenimiento de la medida de fuerza tenía como un objetivo esencial la adhesión de los empleados peronistas.

La tercera semana encontró al conflicto trabado. Los trastornos ocasionados al sistema financiero eran enormes, pero el gobierno no daba señales de transigir. Los empleados en paro comenzaban a sufrir el desánimo de una lucha que parecía sin salida. Incluso en una entidad como la CNAP, donde el acatamiento fue importante, hacia fin de mes el comunicado del comité de huelga incluía una invocación a "los pocos remisos".

Tanto en el sector de seguros como en el bancario, la división fundamental que aquejaba a los huelguistas era la que separaba al personal "empleado" del personal "jerárquico". Esta distinción técnica era también económica y de status. En cierto modo era la exacerbación del lugar tradicional del bancario frente al obrero fabril. El empleado "jefe" tenía un interés material en la continuación de su trabajo mejor remunerado y estaba separado de sus subordinados por razones de diversa índole, que no eran sólo económicas. En los bancos el personal jerárquico tendió a cubrir los

.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Comisión Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, "Comunicado n° 32", 15 de abril de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> "Comunicado de la Comisión Gremial Interna del B.I.R.P.", 22 de mayo de 1959.

puestos de los huelguistas. No obstante, esa divergencia de intereses era más acusada en los bancos privados que en los oficiales.

Mayo comenzó con una situación sin cambios significativos. Los huelguistas planteaban un discurso incompatible con los ánimos subversivos que denunciaba el gobierno. En una entrevista desde la cárcel para *La Vanguardia*, Gorini subrayaba el incumplimiento de los compromisos contraídos. <sup>42</sup> Las gestiones de mediación por parte de algunos diputados y dirigentes políticos, no sólo de la oposición sino de la misma UCRI, eran infructuosas. Desde *El Bancario* se llamaba a la unidad y solidaridad en torno a la lucha entablada, argumentando que en ella se decidía un panorama concerniente al "pueblo". El mensaje estaba destinado a las dirigencias sindicales de las 62 Organizaciones.

El comunicado de huelga de la CNAP, preparatorio del 1° de mayo, incluyó la situación del momento en el contexto de un ataque contra la "clase trabajadora". La lucha, continuaba el comunicado, la hacían los "obreros" en contra de los "explotadores".

La movilización al microcentro porteño del jueves 7 de mayo fue una buena prueba de la capacidad de movilización gremial, que reunió cerca de tres mil manifestantes que fueron duramente atacados por la policía.<sup>43</sup> En las manifestaciones públicas comenzaron a ganar un lugar las mujeres, especialmente de la CNAP, donde llegaban al 10%, y de la Dirección de Préstamos.<sup>44</sup>

La extensión de la huelga fue posible por la solidaridad que concitaba la lucha bancaria, aunque los trastornos ocasionados en el sistema financiero afectaran el sistema de endosos y cobros de sueldos, diestramente utilizados por la propaganda gubernamental para desacreditar el movimiento. Diversos testimonios indicaron la extensión del *fiado* en almacenes barriales para los empleados en paro. La comisión de solidaridad encabezada por Walter Pezzani se encargó de recolectar fondos destinados al aceitada mecanismo de comunicados que fue otro elemento crucial para evitar el aislamiento de los huelguistas. Se vendieron bonos de solidaridad, principalmente en los barrios en Lanús, Mataderos y La Boca. El sindicato de comercio, liderado por el socialista Armando March, proveyó de "becas" para que los bancarios pudieran almorzar en el comedor gremial.

El conflicto se extendió en el interior del país. Este es un dato importante para calibrar la adhesión a la medida y para pensar el carácter ficticio e inconsulto que se acusó desde el gobierno. La filial cordobesa de la Asociación Bancaria mencionaba, justamente, que la difusión de la huelga a pesar de las persecuciones y el encarcelamiento demostraba la legitimidad de la medida entre las bases. No obstante, la situación se tornaba más difícil por el aislamiento que sufrían los bancarios, tan diferente de la conexión en el centro de la ciudad que favorecía a los empleados de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria

El día 15, el comité de huelga de la Caja envió una carta de los empleados de los bancos Francés e Italiano, instándolos a sumarse a la medida de fuerza. El argumento del comité denunciaba la falta de cumplimiento del decreto 3.133, cuyos cambios en el escalafón fueron sustituidos por aumentos salariales. Pero el cambio de la actitud gubernamental, admitía la carta, había suscitado escasa oposición en los dos bancos aludidos.

La carta concluía con un llamado a la defensa de la organización gremial, cuya continuidad peligraba luego de la intervención de que había sido objeto. Tal como ya fue mencionado, el MUCS y la regional Avellaneda de las 62 Organizaciones habían llamado a un paro general de solidaridad que se realizó el 12 de mayo. Como recordaba un dirigente comunista, ya era tarde para construir un "comando único". 46 Un comunicado del comité de huelga de la CNAP lamentaba que algunos dirigentes peronistas se hubieran opuesto en el seno de las 62 Organizaciones a coincidir en el paro con el MUCS. 47 No obstante, entre los delegados del movimiento bancario y del seguro parecía

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> "Los bancarios sólo exigen que el gobierno cumpla la ley", en *La Vanguardia*, 12 de mayo de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Véase *Noticias Gráficas*, 7 de mayo de 1959, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Comité de Huelga de la CNAP, "Comunicado n° 17", 8 de mayo de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> "Habría mediación", en *Los Principios*, Córdoba, 20 de mayo de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> R. Iscaro, *Curso de educación sindical*, Buenos Aires, Fundamentos, 1964, p. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Comité de Huelga de la CNAP, "Comunicado n° 16", 7 de mayo de 1959.

emerger una luz de esperanza. La reunificación de la organización obrera prometía revigorizar la capacidad de lucha puesta a prueba por la irreductible postura gubernamental.

Un nuevo ultimátum para el retorno al lugar de trabajo fue fijado por los bancos para el 22 de mayo. El comité de huelga organizó para ese día una marcha que se concentró en la Plaza del Congreso. La meta principal era la entrega de un memorial al parlamento, al que se requería la gestión de una solución ante el gobierno. El comité de huelga del Sindicato del Seguro subrayó el objetivo de mostrar a los legisladores que el enemigo era el FMI.

Después de algunas alocuciones la masa bancaria y del seguro, en un número superior a los 12.000 comenzó a transitar el camino hacia el microcentro. La policía cerró el paso a la altura de la Plaza de la República y se produjeron disturbios. Los obreros de la construcción que trabajaban en el Mercado del Plata se suman a la lucha del lado de los bancarios. Los trabajadores de la construcción comenzaron a arrojar cascotes y tablas contra la policía.

Los resultados de los múltiples esfuerzos bancarios eran desiguales. En el interior del movimiento huelguístico, continuaba una mayoritaria adhesión a la dirigencia gremial, aunque se admitía que la propaganda oficial comenzaba a causar desaliento. Pero sin duda la mayor dificultad residía en la lucha por la legitimidad pública de la medida de fuerza. Para el 25 de mayo *El Bancario* dio a conocer un texto firmado por Gorini y Castillo donde, después de expresar su homenaje a los "forjadores" de la patria, explicaban el "aparente contrasentido" de la huelga. Es que a esa altura de la disputa con los bancos y el gobierno aparecía como un innecesario perjuicio contra la población. De allí que tuvieran que reafirmar la validez del reclamo gremial y subrayar que los agredidos eran los empleados bancarios.

El 1° de junio se produce la detención de los dirigentes de la huelga. Entre las mujeres, sólo sufrió una larga detención Beatriz Donati, del Banco Italiano. Donati había sido cesanteada poco después de iniciada la huelga. Asistía a sus compañeros presos hasta que fue apresada por la policía y enviada a la Cárcel del "Buen Pastor" y luego a la Cárcel de Mujeres de la calle Humberto I°.

Las comisiones internas siguieron emitiendo comunicados en los que denunciaban en el presidente Frondizi la falta del cumplimiento de su palabra. El Sindicato del Seguro cargaba las tintas contra Blejer. Su lenguaje se cuidaba de atacar directamente a Frondizi y solicitaba que fuera reemplazado por "alguien capaz de tratar las relaciones obrero-estatal-patronal, con criterio moderno y civil". 49

Los bancarios insistían con su propuesta de cimentar una coordinación. Ofrecían a los sectores en lucha -ferroviarios, metalúrgicos, frigoríficos, telefónicos, de Obras Sanitarias, de la construcción- la formación de un "comité intersindical". Insistían en el llamado el 7 de junio, día número 52 desde el inicio de la huelga. El 8 de junio de 1959, *El Bancario* publicó una carta del secretario adjunto, Gorini, donde éste expresaba su confianza en la continuidad de la lucha y desmentía las noticias de la victoria gubernamental.

La realidad era sin embargo menos auspiciosa para los huelguistas. El gobierno dio un ultimátum hasta el 4 de junio que tuvo éxito parcial. Primero en los bancos privados y luego en la CNAP, los empleados abandonaban la resistencia y volvían al trabajo. La debilidad del gremio ante la dureza del gobierno se había mostrado en la búsqueda de una mediación de algunos diputados como Alfredo Palacios, Lucas Ayarragaray y Marini. Los buenos oficios de estos dirigentes políticos no fueron escuchados.

Tampoco dio resultado la gestión del sindicalista chileno, Goldsack Donoso, cuyo arribo largamente anunciado encontró cerradas las puertas de la Casa de Gobierno. Por el contrario, el gremialista fue seguido por la policía, que detuvo a los dirigentes de la huelga.

Los únicos que pudieron realizar una gestión fueron miembros del propio partido gobernante. *La Vanguardia* criticaba la existencia de "mediadores" del propio partido de Frondizi. Destacaba seguidamente que su mediación sería proclive a perjudicar a los huelguistas y llamaba a reconsiderar. Pero de allí hay dos conclusiones a extraer, que no eran mencionadas por el diario socialista. En primer lugar que dentro del propio radicalismo intransigente se veía al gobierno como

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Comisión Interna del Banco Nación, "Comunicado n° 132", 1° de junio de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Sindicato del Seguro, *Boletín Informativo*, n° 11, 29 de mayo de 1959.

un agente autonomizado. En segundo lugar, que los huelguistas debían ceder a esa mediación dada la contumacia gubernamental y el aislamiento de las grandes organizaciones peronistas.

Quizás la señal más evidente del sentido de la lucha estuvo dada por el comunicado distribuido por la Mesa Ejecutiva Gremial de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, en que el reconocía que un importante sector había regresado a sus puestos. La debilidad del movimiento huelguístico, como había acontecido con otros conflictos de la época, no residía tanto en el acatamiento de las bases. La estrategia gubernamental no podía ser contrarrestada indefinidamente sin una solidaridad del movimiento obrero en su conjunto. Y como vimos, la actitud de los "32" y las "62" fue de desconfianza. El gremio bancario dirigió una exhortación a otros sectores de trabajadores. El texto señalaba que la estrategia gubernamental buscaba derrotar a los gremios en lucha aislada. Indicaba como única salida posible la conformación de un Comité Intersindical de Huelga constituido por los sindicatos combativos: ferroviarios, construcción, frigoríficos, telefónicos, de Obras Sanitarias, metalúrgicos. El llamado fue desoído. La suerte estaba echada. Desde el gobierno se había descalificado al MUCS "comunista". En una declaración firmada por Máximo Baringoltz, Manuel Moreira, Augusto R. Grano y Julián Guillén, el MUCS respondió al ministro del Interior que había acusado al movimiento de responder a directivas del Partido Comunista. Lo indiscutible era que la capacidad de lucha del MUCS era restringida.

El 22 de junio, con la intermediación del senador nacional y jefe de la bancada ucrista Francisco J. Melani, denominado "gestor gubernamental", el sindicato levantó el paro. Un sector del gremio intentó resistir el levantamiento de la medida, pero quedó en minoría. Las estipulaciones del acuerdo que Melani se comprometió a gestionar fueron la libertad inmediata de los detenidos, la reincorporación de todos los cesantes, la devolución de los sindicatos y el restablecimiento de las garantías a la actividad sindical, la anulación de medidas adoptadas durante el conflicto tales como la reglamentación de horas extras, causales de despido, etc., el cese de la intervención al Instituto de Servicios Sociales Bancarios restituyendo a su director, el otorgamiento de compensaciones por los salarios no percibidos, aumento salarial de \$ 800 extensivo a los empleados de bancos privados, municipales y provinciales, así como a las compañías de seguros y capitalización de todo el país. Las condiciones fueron cumplidas parcialmente. El tema irresuelto fue el de la reincorporación de despedidos, que ocasionó la realización de paros parciales en algunas entidades.

Una Comisión Central de Cesantes Bancarios, donde se destacaban peronistas como Alfredo Barros o comunistas como Osvaldo Mazzarella (empleado del Banco Industrial), se esforzó por organizar el reclamo de las reincorporaciones. Sin embargo, la recuperación de los puestos de trabajo se realizó con gran lentitud y se utilizó un criterio de discriminación contra quienes estuvieran identificados como simpatizantes del Partido Comunista. La interposición de recursos de amparo logró que algunas personas permanecieran en sus puestos, los cuáles fueron anulados durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Las reincorporaciones tomaron largos años. Durante los gobiernos de Arturo Illia y Héctor Cámpora se realizaron reingresos de numerosos cesantes, nuevamente exonerados con la dictadura militar de 1976. En algunos casos las reincorporaciones definitivas tuvieron lugar recién en los años ochenta, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. Las medidas más duras se tomaron en la Caja Nacional de Ahorro Postal, donde se despidió a un 30% del personal. La dirección de la Caja prohibió las asambleas del personal y obligó a realizar horas extras. La derrota había sido completa. En el Instituto de Servicios Sociales Bancarios se ordenó que el servicio de seguridad custodiara a los cesantes que ingresaran al edificio de la entidad, requieriéndoles por el motivo de su presencia.<sup>54</sup>

La Asociación Bancaria continuó intervenida. Al frente de la misma fue nombrado un oficial de la Marina. Las características de pluralismo, sin embargo, no fueron inmediatamente destruidas.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> "Una importante gestión realizan los bancarios", en *La Vanguardia*, 16 de junio de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> "El MUCS no recibe órdenes del Partido Comunista ni de ningún otro partido", en *La Vanguardia*, 9 de junio de 1959

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> C. Imizcoz, ob. cit., p. 43-44.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> "Fin de la huelga de los bancarios", en *La Vanguardia*, 23 de junio de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> El Delegado, n° 5, agosto de 1959, editado por la Comisión Gremial Interna del ISSB, p. 4.

Durante el gobierno Illia se realizaron elecciones para designar comisiones internas. En una institución crucial en la estructura de poder de representación gremial como fue el Banco Nación, triunfó una lista compuesta de radicales, peronistas y algún comunista. El nuevo golpe militar que derribó a Illia en 1966 impidió que la nueva comisión interna asumiera sus funciones.

Es preciso destacar que la derrota de la huelga no implicó un retroceso total de la autoorganización lograda en el bienio anterior. Incluso, para sorpresa del gobierno y la prensa, las comisiones internas continuaron con paros parciales para reclamar por las reincorporaciones.<sup>55</sup>

Un entrevistado, quizás como revancha simbólica, elegía concluir su rememoración del período trayendo al presente la escena de un acto oficial realizado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires después de la huelga de 1959. Los empleados habían sido convocados para rendir homenaje al presidente Frondizi, quien visitaba la institución. El mutismo reinaba mientras el primer mandatario subía por las sólidas escaleras de mármol, acompañado por directivos del banco. Abajo quedaba el cortejo de raleados bancarios, con el amargo sabor de la derrota todavía en los labios. De las filas silentes se levantó la voz de un empleado radical-intransigente conocido por su tartamudez, Juan Carlos "Tito" Valencia, quien gritó con toda claridad una expresión que retumbó en toda la sala central del banco: "¡Traidor!". El presidente vaciló un brevísimo instante, sin desviar su mirada de las gradas, apretó las muelas y continuó su marcha.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> "Paros parciales por los cesantes", en *El Bancario*, n° 14, 17 de julio de 1959, p. 1; Comisión Interna del Banco Nación, "Comunicado n° 158", 21 de setiembre de 1959.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Entrevista del autor con Elías Moure, julio de 2007.